



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN

SALA LABORAL

Medellín, junio 6 de 2023

Radicado: 05001-31-05-007-2020-00028-01

Demandante: JORGE IVÁN BENJUMEA MEJÍA.

Demandados: COLPENSIONES Y PORVENIR SA.

Asunto: APELACIÓN DE SENTENCIA-CONSULTA.

Tema: INEFICACIA DE TRASLADO ENTRE REGÍMENES

La Sala Sexta de decisión, presidida por la magistrada ponente **LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE**, e integrada por las magistradas **MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA Y ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ**, procede a emitir sentencia dentro del proceso ordinario laboral de la referencia; decisión que se emite en forma escrita atendiendo a las disposiciones del artículo 13 de la Ley 2213 de 2022.

Acreditados los presupuestos procesales y sin que se evidencien causales de nulidad que invaliden lo actuado, se procede a emitir la presente decisión.

1. ANTECEDENTES.

De la demanda presentada.¹

Lo pretendido por la parte actora con su demanda es que se declare la ineficacia o nulidad de la afiliación al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad -RAIS- y como consecuencia de ello, se ordene su regreso sin solución de continuidad al Régimen de Prima Media con Prestación Definida – RPM-, adicionalmente se

¹ 01PrimeraInstancia. Folios 8 a 20 Archivo 01 del expediente digital.

ordene el reconocimiento y pago de la pensión de vejez bajo los presupuestos de dicho régimen, se imponga el pago de los intereses moratorios contemplados en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993 sobre el retroactivo debidamente liquidado o en subsidio la indexación.

Como fundamento a estas solicitudes, manifestó la parte actora que nació 02 de marzo de 1957 y que para la fecha de presentación de la demanda contaba con 62 años. Indicó más adelante que su primera afiliación al sistema pensional se dio en el Régimen de Prima Media con Prestación Definida para el 07 de junio de 1977.

Posteriormente afirma, que para el **año 1994** se trasladó de régimen de pensiones, esto es, del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad con destino a la AFP PROTECCION SA fondo de pensiones al cual se encuentra afiliado actualmente.

Señala la parte actora que no obtuvo información sobre su caso en particular por parte de la administradora de pensiones privada aquí demandada, ni las consecuencias que generaría su traslado al RAIS, por lo que considera que ese acto jurídico resulta ineficaz.

De la respuesta a la demanda.

Por parte de Colpensiones. ²

La entidad al momento de dar respuesta a la demanda se opuso a las pretensiones, manifestando que si bien era cierto que el demandante se había afiliado al RPM, no le constaba las circunstancias de tiempo, modo y lugar que motivaron el traslado de régimen pensional.

² 01PrimeraInstancia. Archivo 05 del expediente digital.

Por parte de Protección S.A. ³

Esta administradora de pensiones al momento de dar respuesta a la demanda se opuso a la totalidad de las pretensiones, manifestando que brindó una información clara, oportuna, comprensible y cierta al accionante, que para tal efecto éste suscribió un formulario donde confirmaba tal situación.

Por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público⁴.

El Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín mediante auto del 05 de agosto de 2021 adoptó una medida de saneamiento, ordenando integrar al contradictorio al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

Como fundamento a tal decisión, la A-quo se basó en un análisis a los anexos de la contestación a la demanda emitida por la AFP Protección donde halló que el demandante había iniciado todos los trámites necesarios para el reconocimiento de su mesada pensional, entre ellos la redención del bono pensional.

Una vez notificada la Nación- Ministerio de Hacienda y Crédito Público se opuso a la prosperidad de las pretensiones, manifestando no constarle las situaciones particulares en las que ocurrió el traslado de régimen realizado por el demandante; sin embargo afirmó que dicha entidad no tiene alguna obligación pendiente de atender frente a la solicitud de reconocimiento de pensión de vejez de garantía mínima, pues los bonos pensionales a los que tenía derecho el demandante se encuentran emitidos y redimidos por dicha entidad.

De la sentencia de primera instancia.⁵

En sentencia de primera instancia el día 03 de mayo de 2022 el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín declaró ineficaz el traslado entre regímenes realizado por el actor, con la consecuente obligación de devolver con destino a la

³ 01PrimeraInstancia. Folios 81 a 104 Archivo 02 del expediente digital

⁴ 01PrimeraInstancia. Archivos 21 y 26 del expediente digital

⁵ 01PrimeraInstancia. Archivos 12-13 del expediente digital.

Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los valores que corresponden al bono pensional. Posterior a esto, ordenó a la AFP PROTECCION retornar los recursos obrantes en la cuenta individual, y los aportes al fondo de garantía de pensión mínima, exceptuando las cuotas de administración y las sumas que hubiesen sido destinadas al pago de seguros previsionales para los riesgos de invalidez y muerte.

Condenó a Colpensiones a reconocer la pensión de vejez a favor del demandante incluyéndolo en nómina de pensionados del mes de junio de 2022, con disfrute de la mesada pensional a partir del 1 de abril de 2019, atendiendo a 13 mesadas al año, calculadas con el ingreso base de liquidación del artículo 21 de la Ley 100 de 1993 y sometiendo el cálculo de tasa de reemplazo a las condiciones contenidas en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 modificado por la Ley 797 de 2003, disponiendo su indexación.

Finalmente absolvió a las codemandadas de las demás pretensiones incoadas en su contra condenando en costas a la AFP PROTECCION.

2. DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA.

Del recurso de apelación presentado por la Parte Actora⁶.

Inconforme con la decisión el apoderado de la parte demandante impugnó la sentencia de primera instancia, solicitando que los valores que corresponden al bono pensional no sean devueltos a la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, sino que dichos valores deben ser incorporados a la cuenta de ahorro individual del demandante, y posteriormente deben ser trasladados a COLPENSIONES dada la declaratoria de ineficacia y con esto fijar de manera íntegra el monto de la pensión.

⁶ 01PrimeraInstancia. Archivo 35 el expediente digital. Entre 1h 07 minutos 39 segundos a 1 h 11 minutos 33 segundos.

Además, solicitó se ordene al fondo privado trasladar el porcentaje destinado al pago de seguros previsionales y gastos de administración. Finalmente solicitó que en esta instancia fuera definido el monto de la pensión a partir del mes de abril de 2019.

Del recurso de apelación presentado por Protección⁷.

Esta parte manifestó su inconformidad contra la sentencia de primera instancia en lo que concierne a la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen pensional en tanto se acreditó en el proceso que el demandante había adquirido la calidad de pensionado, toda vez que esta condición se adquiere con el acto jurídico del reconocimiento de la pensión y en el presente caso se acreditó.

Indicó que el demandante recibió el reconocimiento de la garantía de pensión mínima y eligió la modalidad pensional, por tanto solicita se analice el caso desde la óptica de la calidad de pensionado que tiene el demandado y no como afiliado pese a que hasta la fecha no se ha realizado pagos de mesadas pensionales, teniendo presente que el demandante decidió no continuar con los trámites.

Por parte de Colpensiones⁸.

La apoderada de esta parte también recurrió la decisión de primera instancia solicitando su revocatoria, manifestando que el status de pensionado no se adquiere con el pago de la primera mesada pensional, sino que el mismo surge del cumplimiento de los requisitos esenciales y concurrentes contemplados en la Ley para acceder a la prestación de vejez, supuestos que en su sentir fueron probados en el proceso.

De forma subsidiaria expuso que de confirmarse la declaratoria de ineficacia, solicita se modifique la sentencia y ordene al fondo privado trasladar todo el saldo

⁷ 01PrimeraInstancia. Archivo 35 del expediente digital. Entre 1h 11 minutos 52 segundo a 1 h 18 minutos 53 segundos.

⁸ 01PrimeraInstancia. Archivo 35 del expediente digital. Entre 1h 19 minutos02 segundo a 1 h 25 minutos 34 segundos.

de la cuenta de ahorro individual, las cuotas abonadas al fondo de garantía de pensión mínima, los rendimientos, la devolución de bonos pensionales, el porcentaje destinado al pago de seguros previsionales y gastos de administración.

Considera esta Sala que al ser una sentencia adversa a los intereses de **COLPENSIONES** y eventualmente del **MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, con base al artículo 69 del CPTYSS se debe conocer el grado Jurisdiccional de Consulta a favor de esas partes, por lo que se analizará esta situación dentro de la presente providencia.

3. ALEGATOS

Concedido el término que establecía el artículo 13 la Ley 2213 de 2022, la parte actora presentó escrito⁹ donde expone que debe confirmarse la decisión de primera instancia en cuanto a la declaración ineficacia de la afiliación del demandante al RAIS, ateniendo las inconformidades planteadas en el recurso de apelación.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público presentó escrito¹⁰ ratificando los argumentos de defensa manifestados durante el proceso; solicitando se confirme la decisión de primera instancia.

4. CONSIDERACIONES DE INSTANCIA

De acuerdo con las pruebas aportadas al proceso, en el presente evento se encuentra por fuera de discusión los siguientes hechos:

⁹ 02SegundaInstancia. Archivo 03 del expediente digital.

¹⁰ 02SegundaInstancia. Archivo 05 del expediente digital.

- 1) Que el señor **Jorge Iván Benjumea Mejía** estuvo afiliado al extinto ISS desde el año 1977 y realizó un traslado al RAIS a través de la AFP Protección en el mes de septiembre de 1994¹¹.
- 2) Que previa solicitud del demandante, la AFP PROTECCION le reconoció pensión de vejez a través de comunicado del mes de junio de 2019.¹²
- 3) Que el demandante en el mes noviembre de 2019 solicitó a Colpensiones su regreso al Régimen de Prima media con el consecuente reconocimiento y pago de pensión de vejez; y que esta entidad mediante comunicado de fecha 22 de noviembre de 2019 negó ambas solicitudes.¹³

Estudiando el expediente producto del recurso de apelación presentado por todas las partes en contra de la sentencia de primera instancia e igualmente ante el estudio del grado jurisdiccional de Consulta concedido en favor de Colpensiones y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se debe señalar que al perseguirse dentro de la demanda la ineficacia de traslado pensional implica realizar un análisis de las condiciones que rodearon el traslado de régimen pensional del RPM al RAIS y verificar si en aquél acto de traslado existió una indebida asesoría por parte de la administradora de pensiones privada, de manera que si se acredita un vicio en el consentimiento del afiliado traducido en su desconocimiento de las condiciones pensionales del régimen al cual se trasladaba, por omisión de la información por parte del fondo en cuestión, se debe declarar la ineficacia del acto de traslado y como consecuencia de ello la declaración que su afiliación fue sin solución de continuidad en el régimen pensional de procedencia, que en este caso corresponde al RPM.

A. LA AFILIACION AL REGIMEN PENSIONAL DEBE SER LIBRE Y VOLUNTARIA

¹¹ 01PrimeraInstancia. Folio 39 Archivo 08.

¹² 01PrimeraInstancia. Folios 82 a 96 Archivo 08

¹³ 01PrimeraInstancia. Folios 21 a 92 Archivo 01.

Con la creación del Sistema General de Pensiones establecido en la Ley 100 de 1993, la finalidad principal fue la de crear un sistema pensional uniforme, independientemente de la naturaleza del vínculo laboral del afiliado en armonía con la pauta Constitucional del artículo 48 en el cual la seguridad social se garantiza a todos los habitantes del territorio nacional en condiciones de igualdad.

La Ley 100 de 1993 incorporó en el sistema pensional dos regímenes solidarios que coexisten, pero excluyentes entre sí como lo son el Régimen Solidario de Prima Media con Prestación Definida y el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, frente a los cuales las personas se pueden afiliar en condición de libertad dependiendo de la conveniencia que en su caso personal tenga uno u otro¹⁴.

En relación con la permanencia mínima del afiliado en el régimen pensional seleccionado dispuso el artículo 13 de la Ley 100 de 1993, modificado por el artículo 2° de la Ley 797 de 2003, lo siguiente:

“ARTÍCULO 13. Características del Sistema General de Pensiones. El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características:

*e) Los afiliados al Sistema General de Pensiones podrán escoger el régimen de pensiones que prefieran. Una vez efectuada la selección inicial, **estos sólo podrán trasladarse de régimen por una sola vez cada cinco (5) años**, contados a partir de la selección inicial. Después de un (1) año de la vigencia de la presente ley, el afiliado **no podrá***

¹⁴ Decreto 692 de 1994. Artículo 3. ***“Selección de Régimen pensional. A partir del 1° de abril de 1994, los afiliados al Sistema General de Pensiones previsto en la ley 100 de 1993, podrán seleccionar cualquiera de los dos regímenes que lo componen. En consecuencia deberán seleccionar uno de los siguientes regímenes:***

a) Régimen solidario de prima media con prestación definida;

b) Régimen de ahorro individual con solidaridad.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 de la ley 100 de 1993, ninguna persona podrá estar simultáneamente afiliado a los dos regímenes del Sistema.”

trasladarse de régimen cuando le faltaren diez (10) años o menos para cumplir la edad para tener derecho a la pensión de vejez.”

Si bien es cierto que dicha norma consagra una prohibición legal, no implica que la misma sea total ni absoluta, toda vez que siempre debe analizarse el momento del traslado de régimen pensional, para verificar si el mismo fue libre y voluntario, esto es, precedido de una información completa en la que sean explicadas y abordadas las implicaciones que conlleva esa decisión.

El objeto del Sistema General de Seguridad Social en Pensiones es proteger a las personas frente a los riesgos de invalidez, vejez y muerte, pues de presentarse éstos comportan la afectación de los ingresos de la persona y/o de su núcleo familiar, generando una vulneración en los derechos fundamentales del afiliado o beneficiario de forma directa o por conexidad.

Por lo anterior resulta cardinal la elección del régimen pensional que responda a las necesidades y perfil de cada afiliado, siendo vital el papel desempeñado por las administradoras de pensiones en la información que suministran previa a su elección, en la gestión y acompañamiento que brinden al afiliado en el transcurso del trayecto pensional así como en la fase de la definición de un derecho pensional. Por ello, para el afiliado, quien en la mayoría de los casos es lego en la materia, es trascendental esa información que suministre en la antesala de la afiliación la administradora de pensiones, de forma que el afiliado deposita toda su confianza en esta entidad, quien tiene el deber legal de asesorarlo plenamente, como quiera que dicha decisión tiene implicaciones a corto, mediano y largo plazo sobre su futuro pensional.

Todo ello explica la importancia para un afiliado respecto a la elección de régimen pensional, siendo el acto jurídico de afiliación o de traslado un asunto crítico y que debe estar revestido de la información suficiente, deber de orden legal que recae en las administradoras de pensiones en virtud de los artículos 20, 48, 53, 78 y 335

de la Constitución Política de Colombia, el Decreto 663 de 1993 y Decreto 720 de 1994¹⁵.

Del mismo modo el literal B del artículo 13¹⁶ y 271¹⁷ de la Ley 100 de 1993 prescribe el derecho de todo afiliado al SGP para que la elección de régimen pensional sea libre y voluntaria, la cual sólo se predica cuando el acto fue suficientemente informado, consentimiento que cuando no es perfeccionado comporta indefectiblemente a que el acto no produzca efectos, esto es, se reputa ineficaz.

Ese deber de información se encuentra establecido en el artículo 97 del Decreto 663 de 1993 (Estatuto Orgánico Financiero), los artículos 4, 14, 15 y 17 del Decreto 656 de 1994, así como en los artículos 10 y 12 del Decreto 720 de 1994,

¹⁵ Decreto 663 de 1993. “Artículo 97. Numeral 1. Texto original. Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado.” después a través del artículo 23 de la Ley 797 de 2003 de mantuvo este deber de información a los usuarios. Y se modificó los siguientes aspectos para profundizar aún más en este deber. El nuevo texto es el siguiente: “Las entidades vigiladas deben suministrar a los usuarios de los servicios que prestan la información necesaria para lograr la mayor transparencia en las operaciones que realicen, de suerte que les permita, a través de elementos de juicio claros y objetivos, escoger las mejores opciones del mercado y poder tomar decisiones informadas.

En tal sentido, no está sujeta a reserva la información correspondiente a los activos y al patrimonio de las entidades vigiladas, sin perjuicio del deber de sigilo que estas tienen sobre la información recibida de sus clientes y usuarios.”

¹⁶ “**ARTÍCULO 13. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES.** El Sistema General de Pensiones tendrá las siguientes características: b. La selección de uno cualquiera de los regímenes previstos por el artículo anterior es libre y voluntaria por parte del afiliado, quien para tal efecto manifestará por escrito su elección al momento de la vinculación o del traslado. El empleador o cualquier persona natural o jurídica que desconozca este derecho en cualquier forma, se hará acreedor a las sanciones de que trata el inciso 1o. del artículo 271 de la presente ley.”

¹⁷ “**ARTÍCULO 271. SANCIONES PARA EL EMPLEADOR.** El empleador, y en general cualquier persona natural o jurídica que impida o atente en cualquier forma contra el derecho del trabajador a su afiliación y selección de organismos e instituciones del Sistema de Seguridad Social Integral se hará acreedor, en cada caso y por cada afiliado, a una multa impuesta por las autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social o del Ministerio de Salud en cada caso, que no podrá ser inferior a un salario mínimo mensual vigente ni exceder cincuenta veces dicho salario. El valor de estas multas se destinará al Fondo de Solidaridad Pensional o a la subcuenta de solidaridad del Fondo de Solidaridad y Garantía del Sistema General de Seguridad Social en Salud, respectivamente. La afiliación respectiva quedará sin efecto y podrá realizarse nuevamente en forma libre y espontánea por parte del trabajador. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para el control del pago de cotizaciones de los trabajadores migrantes o estacionales, con contrato a término fijo o con contrato por prestación de servicios.”

los que en suma implican para las administradoras de fondos de pensiones la obligación de: i. Estudiar el caso concreto de cada afiliado, ii. Informarle como buen experto y profesional en la materia, las condiciones favorables y desfavorables de la operación que se va a surtir, iii. acompañarlo en todo su trayecto pensional como un buen asesor a su consumidor financiero e, inclusive ha llegado la legislación a exigirles iv. Hacer un estudio comparativo con el régimen del cual proviene y al cual se dirige, es decir, todas estas normas enmarcadas en el deber de orientar al afiliado sobre las disposiciones del SGP y del régimen pensional al cual se aspira pertenecer.

Para la Sala, la elección y traslado de régimen pensional es un asunto significativo en la historia pensional de un afiliado, el deber de prevenir y precaver dichas circunstancias recae sobre el asesor profesional de la AFP, asimilando la asesoría del fondo de pensiones a un consentimiento plenamente informado, de manera que si no se brinda de forma que le permita definir claramente su expectativa pensional, el mismo no se encuentra perfeccionado.

Este asunto ha sido ampliamente abordado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, creando un precedente de hace más de quince años sobre la materia, el cual se mantienen pacífico y por el contrario en cada pronunciamiento que emite la Corporación aumenta el grado de protección sobre los afiliados del SGP.

B. PRECEDENTE JUDICIAL DE LA SALA LABORAL CSJ Y LAS SUBREGLAS ESTABLECIDAS

La posición asumida por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en torno a los a los cientos de procesos que ha abordado su estudio buscando la nulidad o ineficacia del acto de traslado pensional, ha sido unánime en indicar que la falta

o la indebida asesoría por parte de las administradoras de pensiones al momento de la elección o traslado del régimen pensiones implica la ineficacia de dicho acto.

Así lo sostuvo desde la sentencia hito en la línea jurisprudencial con la sentencia Radicación 31989 de 2008 determinando en esa providencia que las administradoras de pensiones tienen el deber de proporcionar a sus interesados una información completa y comprensible a la medida de la asimetría entre un administrador experto y un afiliado lego. En ese momento explicaba la Corte que la consecuencia de tal incumplimiento era la declaratoria de la **nulidad del acto jurídico de traslado**, independientemente del estatus pensional del demandante¹⁸.

Para el año 2014 la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia varió su postura reafirmando el criterio asentado en la sentencia con radicado N° 31.989 del año 2008 en cuanto al deber que le asiste a las administradoras de pensiones de suministrar la información suficiente, adecuada y necesaria para este tipo de acto, pero varió la consecuencia jurídica asumiendo que el acto no era nulo sino ineficaz¹⁹.

Desde entonces y con el paso del tiempo esta línea jurisprudencial se ha mantenido pacífica y se han establecido subreglas para la subsunción judicial, en las que claramente denota la posición que asume el órgano de cierre de esta especialidad en cuanto al respeto a los cánones legales y el derecho a la selección libre y voluntaria que tienen los afiliados al SGP.

C. SUBREGLAS DE LA LINEA JURISPRUDENCIAL DE LA SALA LABORAL DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

¹⁸ Ver sentencias Radicación 33083 y 31314 de 2011.

¹⁹ Ver sentencias SL 12136 de 2014, SL- 9519 de 2015, SL 19447 de 2017, SL 17595 de 2017, SL-2372 de 2018.

Frente a cada una de las argumentaciones que se han vertido en los innumerables casos que ha conocido esta Corporación la Corte ha establecido unas pautas claras a tener en cuenta:

- **SOBRE LA VALIDEZ DEL FORMULARIO DE AFILIACION:** Ha dicho la SL de la CSJ que el deber de información es ineludible, por lo que el simple consentimiento vertido en un formulario de afiliación resulta insuficiente²⁰.
- **SOBRE EL ORIGEN DEL DEBER DE INFORMACION:** Destaca que el deber de información cada vez involucra un mayor nivel de exigencia a medida que se genera una conciencia de las implicaciones, derechos y deberes que implica la afiliación al sistema general de pensiones, identificando 3 etapas de acuerdo a la normativa vigente que regula y desarrolla este tema²¹.

Etapas acumulativas	Normas que obligan a las administradoras de pensiones a dar información	Contenido mínimo y alcance del deber de información
Deber de información	Arts. 13 literal b), 271 y 272 de la Ley 100 de 1993 Art. 97, numeral 1.º del Decreto 663 de 1993, modificado por el artículo 23 de la Ley 797 de 2003 Disposiciones constitucionales relativas al derecho a la información, no menoscabo de derechos laborales y autonomía personal	Ilustración de las características, condiciones, acceso, efectos y riesgos de cada uno de los regímenes pensionales, lo que incluye dar a conocer la existencia de un régimen de transición y la eventual pérdida de beneficios pensionales
Deber de información, asesoría y buen consejo	Artículo 3, literal c) de la Ley 1328 de 2009 Decreto 2241 de 2010	Implica el análisis previo, calificado y global de los antecedentes del afiliado y los pormenores de los regímenes pensionales, a fin de que el asesor o promotor pueda emitir un consejo, sugerencia o recomendación al afiliado acerca de lo que más le conviene y, por tanto, lo que podría perjudicarlo
Deber de información, asesoría, buen consejo y doble asesoría.	Ley 1748 de 2014 Artículo 3 del Decreto 2071 de 2015 Circular Externa N.º 016 de 2016	Junto con lo anterior, lleva inmerso el derecho a obtener asesoría de los representantes de ambos regímenes pensionales.

- **INVERSION DE LA CARGA DE LA PRUEBA:** Dentro de los procesos de ineficacia de traslado, la persona alega en su demanda que no recibió la

²⁰ Ver sentencia SL-19447 de 2017.
²¹ Ver sentencias SL-1452 de 2019, SL 1688 de 2019.

información debida cuando se afilió, ello corresponde a un supuesto negativo que no puede demostrarse materialmente por quien lo invoca. Tal afirmación se acredita con el hecho positivo contrario, esto es, que se suministró la asesoría en forma correcta. Entonces, como el afiliado no puede acreditar que no recibió información de manera completa, corresponde a su contraparte demostrar que sí la brindó, dado que es quien está en una mejor posición de hacerlo.

Postulado que se compagina con los principios de justicia y buena fe, el cual se concreta en la institución de la carga dinámica de la prueba, en la medida que las administradoras de fondos de pensiones que afirman que sí brindaron una información suficiente, cuentan también con unas mejores condiciones para demostrarlo²².

- TRASLADOS HORIZONTALES EN EL RAIS: El hecho de que una persona se haya trasladado varias veces al interior del RAIS no exime a cada administradora de pensiones de darle la información sobre los efectos y consecuencias de dicho traslado. Por tanto, brindar información a los afiliados, es un deber en cabeza de las administradoras de pensiones, que se mantiene en el tiempo y no se diluye con traslados horizontales en el mismo régimen²³.
- IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LA ACCION TENDIENTE A DECLARAR LA INEFICACIA DE UN ACTO JURIDICO: Teniendo presente que los hechos y estados jurídicos no prescriben, a diferencia de los hechos y obligaciones que con consecuencia de esa declaración la Sala ha adoctrinado que estas acciones son imprescriptibles. Por tanto, al declararse la ineficacia de traslado pensional, las implicaciones que genera tal orden, tampoco tienen vocación de prescribir pues precisamente el pronunciamiento judicial busca restablecer las cosas, al estado que se encontraban antes de la celebración del acto jurídico²⁴.

²² Ver sentencias SL 4803 de 2021, SL1688-2019.

²³ Ver sentencias SL-3349 de 2021, SI 1008 de 2021.

²⁴ Ver sentencias SL-1688 de 2019 SL-1689 de 2019, SL 361-2019, SL 1421 de 2019, SL-4426 de 2019, SL 4360 de 2019, SL 373 de 2021.

- LA INEFICACIA DEL ACTO DE TRASLADO SE DECLARA A PESAR DE NO TENER EL AFILIADO REGIMEN DE TRANSICION PENSIONAL: También ha sostenido la SL de la CSJ que radica en la AFP el deber de brindar una información oportuna y adecuada a los afiliados, independientemente de si las personas son beneficiarias del régimen de transición o no, o si están próximas a adquirir el status pensional o si se están próximas a adquirir requisitos para pensionarse, esto debido a que la omisión del deber de información se predica frente a la validez o no del acto jurídico de traslado o incluso de la afiliación²⁵.
- INEFICACIA DEL ACTO DE TRASLADO EN SITUACION DE PENSIONADO DEL RAIS: Finalmente, para esa corporación judicial si se acreditaba la falta de información a la hora de materializar el acto de traslado de régimen pensional, no era relevante si se encontraba ante un afiliado o pensionado del RAIS pues la declaratoria judicial buscaba devolver las cosas al estado anterior. Empero tal postura fue replanteada por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en el año 2021 al considerar que la calidad de pensionado es una situación jurídica consolidada, un hecho consumado, el cual no es razonable revertir o retrotraer, pues ello daría lugar a disfuncionalidades que afectarían a varias personas, entidades, actos, relaciones jurídicas y por tanto, derechos obligaciones e intereses de terceros en todo el sistema pensional. Por esta razón, y como ha venido siendo aceptado por la Sala Laboral del Tribunal Superior de Medellín dichas pretensiones son improcedentes, por las implicaciones que acarrea tal declaración.

En su lugar, para este tipo de reclamaciones judiciales se dejó dispuso por parte del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, la posibilidad de que

²⁵ Ver sentencias SL 1452 de 2019, SL 1688 de 2019, SL 1689 de 2019, SL 3463 de 2019, SL 1618 de 2022, SL 2484 de 2022 Y SL 932 de 2023 entre otras.

el demandante dirija su acción pretendiendo la indemnización total de perjuicios a cargo las AFPS involucradas²⁶.

- SOBRE LOS EFECTOS DE LA DECLARATORIA DE INEFICACIA DE TRASLADO: acreditada la falta de información por parte del fondo de pensiones, la declaración de ineficacia del acto jurídico del traslado devuelve al afiliado indebidamente trasladado al régimen pensional al que se encontraba inicialmente vinculado, sin que haya lugar a entender que medió solución de continuidad sobre dicha afiliación, esto es, la afiliación al régimen válidamente seleccionado no se entiende interrumpida por el traslado anulado.

La administradora que indujo en error al afiliado para trasladarlo al régimen de ahorro individual, tiene la obligación de devolver al régimen de prima media el 100% de los aportes efectuados por el afiliado, asumiendo a su cargo los deterioros que éstos hubieren sufrido.

La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia señaló que es la administradora de pensiones la que debe devolver al sistema la totalidad de los valores que haya recibido en razón de la afiliación, *“como cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales de la aseguradora, con todos sus frutos e intereses”*, como los dispone el artículo 1746 del Código Civil colombiano, esto es, con los rendimientos que se hubieren causado²⁷.

La orden de reintegro de valores recibido incluye los gastos o comisiones de administración²⁸, así como los porcentajes destinados al Fondo de Garantía de Pensión Mínima y los valores dispuestos para los seguros previsionales³⁶ con cargo a sus propias utilidades.

Adicionalmente, de conformidad con el artículo 10 del Decreto 720 de 1994, que consagra que los errores, infracciones u omisiones que

²⁶ Ver sentencias SL- 373 de 2021, Sala Laboral TSM en sentencia del 14 de agosto de 2019 en proceso con radicado 05001 31 05 007 2015 01295 01.

²⁷ Ver sentencias SL1688 de 2019, 3464 de 2019, SL 4360 de 2019, SL-2877 de 2020, SL- 3871 de 2021, SL 4803 de 2021.

²⁸ Ver sentencias SL4964-2018, SL1688-2019, SL2877-2020, SL4811-2020, SL373-2021

perjudiquen a los afiliados, serán responsabilidad de las administradoras de fondos de pensiones; será ésta quien deba asumir el deterioro del bien administrado (mermas en el capital, pago de mesadas pensionales y gastos de administración) y deberá regresar todos los valores que hubiere recibido con frutos e intereses.

5. DEL CASO EN CONCRETO

De acuerdo con el análisis que se viene realizando teniendo presente los recursos de apelación presentado por todas las partes, así como el Grado Jurisdiccional de Consulta reconocido a favor de COLPENSIONES y el MINISTERIO DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO, resulta necesario por parte de la Sala abordar el fundamento de la sentencia de primera instancia al darse por acreditado, que al demandante no se le brindó una suficiente asesoría al momento de efectuar su traslado del Régimen de Prima Media con Prestación Definida al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad.

Concluyendo la A-quo en su sentencia que, si bien en su vinculación dentro del RAIS recibió información relacionada con mayores garantías dentro del RAIS en comparación con el RPMD, la misma resultó insuficiente para ser considerada como una correcta asesoría sobre su situación pensional particular, sin que obre en el expediente pruebas adicionales en este sentido.

Destaca la Sala del interrogatorio de parte agotado en la audiencia de trámite y juzgamiento²⁹ los siguientes puntos relevantes, que tienen incidencia dentro del problema jurídico planteado así:

1. Indicó el demandante que actualmente reside en un sector rural, sin tener un ingreso fijo mensual.

²⁹ 01PrimeraInstancia.Archivo 34. 27 minutos 46 segundos a 1 h con 37 segundos.

2. Informó que al momento de suscribir el formulario de afiliación se encontraba con un asesor de la AFP PROTECCION, pero no recuerda las circunstancias en las que se dio esa charla.
3. Manifestó en su interrogatorio que la asesoría dada por PROTECCION fue grupal, que allí le indicaron que sus aportes generaban rendimientos y eran heredables, e incluso su valor era mucho mayor que en COLPENSIONES.
4. Expuso que en esa asesoría le informaron que el seguro social iba a desaparecer, que todo iba el sistema pensional iba hacer privado y que Protección era la mejor opción.
5. Declaró que se siente engañado por parte de PROTECCION pues en su sentir, faltó demasiada información toda vez que solo la respuesta a su solicitud pensional se enteró que su mesada pensional sería el salario mínimo.
6. Al exhibírsele unos documentos en audiencia, informó que en efecto radicó una solicitud de reconocimiento de pensión de vejez, pero aclaró que no ha recibido el pago de esa prestación porque había suspendido todo ese procedimiento cuando le informaron el valor de la mesada pensional.

Una vez analizado esta prueba, para esta Sala las afirmaciones realizadas al momento del agotarse el interrogatorio de parte, no tienen la suficiente fuerza probatoria para constituirse en confesiones provocadas o espontáneas; pues lejos de afirmarse que la asesoría brindada al momento de trasladarse fue clara, veraz y oportuna siempre se realizó un constante cuestionamiento sobre la escasa o nula información brindada por la administradora de pensiones privada.

Concluye la Sala que el traslado que realizó el hoy demandante no se dio de manera libre y voluntaria, pues se desconoció para ese momento las implicaciones de su traslado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad, al no haberse realizado ningún acompañamiento por parte de la administradora de pensiones privada, o por lo menos que se haya acreditado en este proceso.

En este mismo sentido no se ahondó por parte de PROTECCION en demostrar haber realizado una asesoría en debida forma al señor **JORGE IVÁN BENJUMEA MEJÍA**, con suficiente conocimiento, claridad y veracidad de las implicaciones de su traslado pensional, como quiera que esta parte es quien tiene la carga de la prueba en este tipo de procesos, por encontrarse en una mejor posición probatoria y su defensa carece de soporte probatorio en este sentido.

Debe indicarse que a pesar de que el actor haya recibido una reasesoría por parte de la AFP PROTECCION, esta situación no convalida la actuación viciada de ineficacia, aspecto que también ya ha sido desarrollado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia determinando que la información que se analiza por parte de los Jueces recae es al momento del acto jurídico de traslado, y no con posterioridad al mismo.

No puede desligarse la pasiva de su carga probatoria al afirmar que el accionante suscribió un formulario de afiliación o reasesoría, pues de acuerdo a las subreglas emanadas de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia no tiene ningún tipo de incidencia tal acción, toda vez que la falta al deber de información no se convalida en ningún momento con la suscripción del formulario, ya que la simple rúbrica o autorización en una pre- forma que contienen una leyenda referente al consentimiento, no suple el deber material instruir de manera efectiva al usuario de forma tal que se genere un panorama real de las condiciones pensionales que abandona y los requisitos que debe satisfacer para beneficiarse de las ventajas y virtudes del régimen al que ingresa.

En igual sentido tampoco se presenta una anuencia o convalidación de traslado por la permanencia en el RAIS, ni con la recepción de extractos, balances de la cuenta de ahorro individual o el movimiento entre administradoras de este sistema, en tanto se trata de actos que no tienen la capacidad de dotar de eficacia a aquello que nació contrariando las normas de orden público.

Respecto a los argumentos de disenso de la pasiva que cataloga al demandante con el estatus de pensionado y que por tanto no es posible la declaratoria de ineficacia, indica esta corporación bajo el entendido de las subreglas determinadas por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en la SL-373 de 2021 en efecto tal pretensión es improcedente.

Sin embargo, en el presente asunto no se configura tal situación, pues si bien el señor BENJUMEA MEJIA causó su derecho a la pensión de vejez, este acto no fue consumado en tanto **NO** ha disfrutado de la misma, por lo que resulta pertinente establecer una diferencia entre causación y disfrute de la pensión de vejez.

Cuando se hace referencia a la causación del derecho a la pensión de vejez, se hace referencia a la consumación de los supuestos de edad y semanas en el régimen de prima media, o en el caso del RAIS frente a la pensión de garantía mínima, que el afiliado llegue a la edad mínima pensional (62 años) y reúna el número de semanas mínimo necesario establecido en la Ley (1.150 semanas) para acceder a esta prestación la cual deviene de la materialización del principio de solidaridad al interior del RAIS, lo que nos remite automáticamente al concepto de derecho adquirido.

A contrario sensu, el disfrute de la prestación hace alusión al momento para el cual un afiliado que tiene causado su derecho pensional, decide recibir de **manera efectiva** su pensión y para ello, debe cesar las cotizaciones al sistema pensional, realizar una solicitud de reconocimiento a su fondo de pensiones y percibir realmente dicha prestación.

Es decir, en efecto debe darse el goce de dicho derecho para entrar a dilucidar el status de pensionado y no atender a simples formalidades o reconocimiento simbólicos que quedan plasmados en un papel que no tuvo eficacia.

En el caso del señor Benjumea Mejía si bien éste adelantó las gestiones administrativas para el reconocimiento pensional, en efecto existe una respuesta que accede favorablemente a esa solicitud, sin embargo, a la fecha no se hizo efectivo el disfrute de ese derecho pensional, por lo que el status de pensionado nunca se materializó. Para la Sala sólo existe una declaración meramente formal que no vincula a ninguna de las partes, puesto que ninguna eficacia le fue impresa, esto es, la declaración de voluntad en su momento no produjo efectos tanto así que PROTECCION se vio imposibilitada a continuar las gestiones pertinentes en el reconocimiento de la pensión por garantía de pensión mínima ante la negativa tácita del demandante de proseguir con ese empeño, por tanto se verifica con el escaso material probatorio aportado por el fondo de pensiones demandado la verdadera intención de afiliado de negarse a cambiar su estatus de afiliado al de pensionado, lo cual devela sin lugar a dudas que ese reconocimiento pensional nunca se concretó.

Destaca la Sala que si bien el derecho a la seguridad social es irrenunciable, en el presente asunto no hablamos estamos ante la renuncia de un derecho, sino de una controversia sobre situaciones jurídicas no consolidadas.

Así las cosas, concluye esta corporación que la decisión de traslado entre regímenes realizada por el demandante, no se fundamentó en una correcta información sobre sus propias condiciones, las derivaciones nocivas que implicaría ese acto jurídico, y en general toda la información eficaz y oportuna relevante para el momento en que se generó el traslado pensional.

Irregularidades que llevan a esta Sala a **CONFIRMAR** la decisión emitida por la A-quo, pues se concluye que en efecto se desconoció el deber de información suficiente y veraz que deben cumplir los fondos de pensiones que ofrecen el traslado de régimen; por lo que resulta necesario ante dicho vicio declarar la ineficacia del traslado al RAIS del señor **JORGE IVAN BENJUMEA MEJIA**.

Sobre los efectos de la declaratoria de ineficacia, debe indicarse que la misma conlleva a que el acto jurídico cuestionado no produce efectos, por tanto, no puede excluirse rubros percibidos por las administradoras privadas producto de la afiliación realizada por el demandante, pues sería restarle valor a la declaratoria de ineficacia.

Sin embargo esta corporación judicial considera necesario modificar el numeral **TERCERO** de la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín, teniendo presente que el demandante en su momento estuvo afiliado al RAIS y por tanto generó la aprobación y posterior redención de un bono pensional Tipo A en el que confluyen como contribuyente cuotapartista la Nación y la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-³⁰, por tanto considera la Sala que en caso de que esta última entidad haya efectuado el pago de su cuota parte para capitalizar ese título, cuyo destino era la cuenta de ahorro individual del demandante, también debe efectuarse el respectivo reintegro de estos valores por concepto de Bono pensional a favor de COLPENSIONES como contribuyente.

Por lo tanto, se ordenará al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que una vez sean reintegrados por parte de la AFP PROTECCION SA los valores correspondientes al Bono pensional tipo A constituido a favor del señor JORGE IVAN MEJIA BENJUMEA, en caso de que COLPENSIONES haya efectuado el respectivo pago como contribuyente, deberá reintegrar dichos valores a esa entidad.

Adicionalmente se modificará el numeral CUARTO de la sentencia ya rememorada, en el sentido de ordenar a la AFP PROTECCION SA que deberá en un término no superior a 30 días desde la ejecutoria de esta providencia, retornar los recursos provenientes de la afiliación del actor que se componen de los montos

³⁰ 01PrimeraInstancia. Folio 45 a 51 del Archivo 26 del expediente digital

depositados en las cuentas de ahorro individual con sus rendimientos, bonos pensionales si se hubieren generado, además de las cuotas de administración, los porcentajes destinados al fondo de garantía de pensión mínima y las cuotas para el cubrimiento de los seguros previsionales, dineros que deberán estar indexados.

En adición debe entenderse que la devolución de estos dineros obedece al principio de sostenibilidad financiera a fin de evitar un detrimento patrimonial al fondo público, siendo Colpensiones quien reconocerá las eventuales prestaciones a que tenga derecho el accionante, por tanto, operará bajo la devolución de la totalidad de recursos captados del actor, al igual que los rendimientos que estos generaron, más la indexación de los rubros correspondientes a gastos de administración y primas de seguros previsionales de invalidez y sobrevivencia, y el porcentaje destinado al fondo de garantía de pensión mínima, con cargo a los recursos propios de la **AFP Protección**.

Ahora, en lo relativo al **reconocimiento pensional** se tiene acreditado en el proceso, que el señor Jorge Iván Benjumea Mejía nació el 02 de marzo de 1957³¹ por tanto al analizarse los presupuestos contenidos en el artículo 36 de la Ley 100 de 1993³², se logra establecer que el mismo no es beneficiario del régimen de transición, pues no contaba con 40 años o su equivalente en años de servicios para el 1° de abril de 1994.

³¹ 01PrimeraInstancia. Archivo 6del expediente digital

³² Ley 100 de 1993. “Artículo 36. **RÉGIMEN DE TRANSICIÓN**. La edad para acceder a la pensión de vejez, continuará en cincuenta y cinco (55) años para las mujeres y sesenta (60) para los hombres, hasta el año 2014*, fecha en la cual la edad se incrementará en dos años, es decir, será de 57 años para las mujeres y 62 para los hombres.

La edad para acceder a la pensión de vejez, el tiempo de servicio o el número de semanas cotizadas, y el monto de la pensión de vejez de las personas que al momento de entrar en vigencia el Sistema tengan treinta y cinco (35) o más años de edad si son mujeres o cuarenta (40) o más años de edad si son hombres, o quince (15) o más años de servicios cotizados, será la establecida en el régimen anterior al cual se encuentren afiliados. Las demás condiciones y requisitos aplicables a estas personas para acceder a la pensión de vejez, se regirán por las disposiciones contenidas en la presente Ley...”

Por tanto, el reconocimiento de su derecho pensional debe analizarse bajo los postulados de la Ley 100 de 1993 con las modificaciones introducidas por la Ley 797 de 2003³³, esto es 62 años, y mínimo 1.300 semanas cotizadas.

- Frente a primer requisito de la edad, el mismo se acreditó para el 02 de marzo de 2019, fecha para la cual el demandante cumplió 62 años.
- Ahora en lo referente al requisito de las semanas de cotización, en el expediente historia laboral expedida por la AFP PROTECCION de fecha 30 de enero de 2021 en la que se refleja que el demandante tiene acumuladas un total de 1662.72 semanas cotizadas y como último ciclo de cotización el 30 de marzo de 2019.

Es decir, la demandante acredita en efecto los requisitos impuestos en el artículo 33 de la Ley 100 de 1993, para acceder al reconocimiento de la pensión de vejez, y por tanto se confirmará la orden de reconocer el pago de esta prestación, pero se modificará el numeral Sexto de la sentencia procediendo en esta instancia a la cuantificación del derecho pensional.

Bajo esta premisa para la cuantificación de la pensión de vejez debe acudir a dos conceptos que corresponden al Ingreso Base de Liquidación y el monto, basado en los artículos 21 y 34 de la Ley 100 de 1993.

³³ *Ibíd.* Artículo 33.” **REQUISITOS PARA OBTENER LA PENSIÓN DE VEJEZ.** Artículo modificado por el artículo 9 de la Ley 797 de 2003. Para tener el derecho a la Pensión de Vejez, el afiliado deberá reunir las siguientes condiciones:

1. Haber cumplido cincuenta y cinco (55) años de edad si es mujer o sesenta (60) años si es hombre.

A partir del 1o. de enero del año 2014 la edad se incrementará a cincuenta y siete (57) años de edad para la mujer, y sesenta y dos (62) años para el hombre.

2. Haber cotizado un mínimo de mil (1000) semanas en cualquier tiempo.

A partir del 1o. de enero del año 2005 el número de semanas se incrementará en 50 y a partir del 1o. de enero de 2006 se incrementará en 25 cada año hasta llegar a 1.300 semanas en el año 2015.”

Por lo que, al **realizar los cálculos correspondientes, para determinar el monto de la pensión de vejez a la que tiene derecho el demandante, se obtuvo la siguiente información:**

Con el promedio de toda la vida laboral se obtuvo un IBL por valor de \$1.739.937.

Con el promedio de los últimos 10 años, se obtuvo un IBL por valor de \$2.774.318.

Dicho esto, por favorabilidad tenérsele en cuenta al demandante el promedio de salarios o rentas de los últimos 10 años. En lo que respecta al monto, se debe acudir a lo regulado en el artículo 34 de la Ley 100 de 1993 para determinar la tasa de reemplazo del demandante partiendo de la fecha de disfrute de la prestación que corresponde al año 2019, para lo cual se evidencian los siguientes datos:

Salario mínimo año 2019. \$828.116.

IBL año 2019: \$2.774.318.

S= Salarios mínimos dentro del IBL ($\$ 2.774.318 / \$ 828.116$) = 3,3501

$R = 65.50 - 0.50 * 3,3401$

R= 63,82 (Porcentaje IBL)

Semanas mínimas: 1.300.

Semanas cotizadas: 1.662,75

Semanas adicionales a las requeridas: 362, 71

Grupo de semanas adicionales: 7

TASA DE REEMPLAZO PARA EL DEMANDANTE 74.32 %

$\$2.774.318 * 74.32 \%$

VALOR MESADA PENSIONAL PARA 2019

\$ 2.062.010

Con fundamento en lo anterior, procede esta corporación judicial a realizar la liquidación del retroactivo por concepto de mesada pensional al que tiene derecho el demandante sin que sea aplicable el fenómeno prescriptivo, por cuanto la causación y el disfrute de la mesada pensional se dio para el año 2019 y la presente demanda fue radicada el año 2020, por lo tanto, no transcurrieron más de 3 años para su reclamación.

Teniendo en cuenta la procedencia del reconocimiento de la prestación solicitada, calculado el retroactivo pensional generado entre el 01 de abril de 2019 extendido hasta el 31 de mayo de 2023, en cuantía \$2.062.010 para el año 2019 actualizado dicho valor³⁴ en razón de 13 mesadas anuales en tanto la prestación se causó con posterioridad al 31 de julio de 2011³⁵; genera un retroactivo a reconocer de \$119.571.398.

Retroactivo Pensional				
Año	IPC	Valor	# mesadas	Total retroactivo
2019	3,80%	\$ 2.062.010	10	\$ 20.620.100
2020	1,61%	\$ 2.140.366	13	\$ 27.824.763
2021	5,62%	\$ 2.174.826	13	\$ 28.272.742
2022	13,12%	\$ 2.297.052	13	\$ 29.861.670
2023		\$ 2.598.425	5	\$ 12.992.123
			TOTAL	\$ 119.571.398

Retroactivo del que se autoriza a Colpensiones a realizar el descuento de los porcentajes con destino al sistema de seguridad social en salud.

A partir del mes de junio de 2023 Colpensiones seguirá pagando la prestación en cuantía de \$2.598.425 a razón de 13 mesadas anuales. Sobre el valor de este retroactivo se mantiene la orden indexación sobre dicho capital, pretensión que no fue controvertida en el recurso de apelación presentado por la activa.

³⁴ Ley 100 de 1993 Artículo 14.
³⁵ Parágrafo transitorio 6. Acto Legislativo 01 de 2005.

Las costas de primera instancia tal como fueron determinadas por la A-quo. En esta instancia, por no salir adelante el recurso de apelación presentado por el apoderado de PROTECCION se condena en costas en la suma de 2 SMLMV en favor del demandante.

Sin costas a cargo de COLPENSIONES en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el **TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN, SALA SEXTA DE DECISIÓN LABORAL**, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, **DECIDE:**

PRIMERO: CONFIRMA la sentencia emitida por el Juzgado Séptimo Laboral del Circuito de Medellín de fecha 02 de mayo de 2022 frente a los numerales Primero, Segundo, Quinto, Séptimo, Octavo, Noveno y se modifica los numerales Tercero, Cuarto y Sexto de esa providencia, los cuales quedarán así:

TERCERO: Se ordena a la AFP PROTECCION S.A. a que en un término no superior a 30 días desde la ejecutoria de esta providencia, deberá trasladar a la Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público los valores que corresponden al bono pensional Tipo A aprobado al señor JORGE IVAN MEJIA BENJUMEA debidamente indexados con cargo a sus propios recursos, en los que concurren como cuotapartista la Nación y la Administradora Colombiana de Pensiones –COLPENSIONES-

Una vez reintegrados dichos valores, teniendo presente que ese bono pensional tiene dos entidades contribuyentes, en caso de que COLPENSIONES haya realizado algún pago correspondiente a capitalizar ese título, se ordena a la Oficina de Bonos pensionales del Ministerio de Hacienda y Crédito Público trasladar dichos valores a la ADMINISTRADORA

COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES- por efectos de la ineficacia de traslado declarada judicialmente.

CUARTO: ORDENAR a la AFP Protección S.A. que en un término no superior a 30 días desde la ejecutoria de esta providencia, deben trasladar a COLPENSIONES en caso de que no lo haya realizado, la totalidad del capital ahorrado por el demandante junto con los respectivos rendimientos financieros, así como bonos pensionales si se hubieren generado, además de los gastos de administración y comisiones estos últimos con cargo a sus propios recursos y debidamente indexados, incluyendo las cuotas de administración, primas para seguro previsional y las sumas descontadas para el fondo de garantía de pensión mínima en proporción al tiempo de vigencia de la afiliación.

Al momento de cumplir esta orden los conceptos trasladados deberán aparecer discriminados con sus respectivos valores, junto con el detalle pormenorizado de los ciclos, IBC, aportes y demás información relevante que los justifique.

SEXTO: Se condena a la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES –COLPENSIONES-** a reconocer y pagar al señor **JORGE IVAN MEJIA BENJUMEA** la pensión de vejez causada desde el 01 de abril de 2019, siendo liquidada por esta corporación bajo un importe de 13 mesadas entre el 01 de abril de 2019 al 31 de mayo de 2023 arrojando un retroactivo pensional de \$119.571.398 valor que deberá ser indexado al momento de su pago, autorizando a COLPENSIONES a que sobre el retroactivo pensional ordenado se efectúen los descuento legales al sistema de salud.

Para el mes de junio de 2023 COLPENSIONES deberá continuar cancelado al actor una mesada pensional de \$2.598.425, con los respectivos incrementos anuales que determine el gobierno para cada año.

SEGUNDO: Las costas de primera instancia, tal como fueron determinadas por la A-quo. En esta instancia se condena en costas a PROTECCION SA. costas en la suma de 2 SMLMV en favor del demandante.

Lo resuelto se notifica por Edicto.

Las Magistradas,


LILIANA MARÍA CASTAÑEDA DUQUE


MARÍA PATRICIA YEPES GARCÍA


ANA MARÍA ZAPATA PÉREZ



TRIBUNAL SUPERIOR DE MEDELLÍN
SALA LABORAL

EDICTO VIRTUAL

La secretaría de la Sala laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Medellín notifica a las partes la siguiente providencia:

Radicado: 05001-31-05-007-2020-00028-01
Demandante: JORGE IVÁN BENJUMEA MEJÍA.
Demandados: COLPENSIONES Y PORVENIR SA.
Decisión: CONFIRMA Y MODIFICA.

Magistrada ponente LILIANA MARIA CASTAÑEDA DUQUE.

CONSTANCIA DE FIJACIÓN

Fijado hoy 7 de junio de 2023 a las 8:00 am, desfijado en el mismo día a las 5:00 Pm y se publica en la página web institucional de la Rama judicial por el término de 1 día hábil, con fundamento en lo previsto en el artículo 41 del CPTSS, en concordancia con el artículo 40 ibídem. La notificación se entenderá surtida al término de fijación del Edicto

RUBEN DARIO LÓPEZ BURGOS
SECRETARIO